

**SOLICITUD DE EJERCICIO DE LA  
FACULTAD DE ATRACCIÓN 247/2015.**

**SOLICITANTE: SEXTO TRIBUNAL  
COLEGIADO DE CIRCUITO DEL  
CENTRO AUXILIAR DE LA PRIMERA  
REGIÓN.**

**PONENTE:  
MINISTRO ALBERTO PÉREZ DAYÁN.**

**SECRETARIA:  
GEORGINA LASO DE LA VEGA ROMERO.**

**Vo. Bo.**

México, Distrito Federal. Acuerdo de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día diecinueve de agosto de dos mil quince.

**VISTOS**, para resolver la solicitud de ejercicio de la facultad de atracción identificada al rubro; y

**RESULTANDO:**

**PRIMERO. Principales antecedentes.** Mediante escrito presentado el trece de septiembre de dos mil doce ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materias Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco, **\*\*\*\*\*** alias, **\*\*\*\*\*** por su propio derecho, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de diversas autoridades en materia de salud, identidad, seguridad social, vivienda, educación, alimentación y trabajo, por los actos que a continuación se precisan:

- ✦ **De las autoridades en materia de salud**, la omisión de garantizar el derecho humano a la salud, así como la protección constitucional y convencional más amplia en la prestación de los servicios de salud con todo lo que ello implica, como medicamentos y tratamiento médico.
- ✦ **De las autoridades en materia de identidad**, la omisión de garantizar el reconocimiento a la personalidad jurídica del quejoso.
- ✦ **De las autoridades en materia de seguridad social y vivienda**, la omisión de proporcionar el acceso a la seguridad social, incluyendo el acceso a una vivienda adecuada, digna y decorosa que establecen los tratados internacionales y la Constitución Federal.
- ✦ **De las autoridades en materia de educación**, la omisión de garantizar el derecho humano de acceso a la educación, que permita al quejoso mejorar sus condiciones de vida.
- ✦ **De las autoridades en materia de alimentación**, la omisión de garantizar el derecho humano a la alimentación nutritiva y suficiente y de calidad.
- ✦ **De las autoridades en materia de trabajo**, la omisión de garantizar el derecho humano al trabajo y sus accesorios, así como un seguro de desempleo
- ✦ **De todas las autoridades mencionadas**, la omisión de garantizar el derecho fundamental al reconocimiento de la dignidad humana.

El promovente invocó como derechos fundamentales violados en su perjuicio, los que se consagran en los artículos 1, 3, 4, 5, 25, 30, 34, 123, 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, 3, 6, 7, 16, 17, 22, 23, 24, 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 1, 3 y 18 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 6, 10 y 13 del Protocolo de San Salvador, 6, 7, 11 y 12 del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

Asimismo, narró los antecedentes del caso, formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes.

Por acuerdo de trece de septiembre de dos mil doce, el Juez Primero de Distrito en Materias Administrativa y de Trabajo, registró el expediente con el número \*\*\*\*\* y, con fundamento en el artículo 73, fracción XVIII, de la abrogada Ley de Amparo **desechó de plano la demanda**, al considerar que no existía un acto concreto, directo y personal en contra del quejoso.

Inconforme con lo anterior, el promovente de amparo interpuso recurso de revisión, del cual correspondió conocer al Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, registrándose al efecto el expediente \*\*\*\*\* . En sesión de quince de enero de dos mil trece, el Tribunal Colegiado determinó **revocar el auto recurrido**, al considerar, sustancialmente, que en la especie no existía algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia.

En cumplimiento del anterior fallo, el Juez Primero de Distrito en Materias Administrativa y de Trabajo admitió a trámite la demanda, requirió a las autoridades responsables para que rindieran sus informes justificados, ordenó dar vista al agente del Ministerio Público, y señaló hora y fecha para celebrar la audiencia constitucional. Agotados los trámites de ley, el Juez de Distrito dictó sentencia el veintitrés de enero de dos mil catorce en la que, por una parte, **sobreseyó** en el juicio y, por otra, **negó el amparo** solicitado por la parte quejosa.

**SEGUNDO. Trámite del recurso de revisión.** Inconforme con la determinación que antecede, la parte quejosa interpuso recurso de revisión en su contra, el cual fue admitido por el Presidente del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, en

acuerdo de doce de agosto de dos mil catorce, registrándose el expediente relativo con el número \*\*\*\*\*

Por otra parte, a través de escritos presentados el veintiocho de marzo y cuatro de septiembre, ambos de dos mil catorce, los representantes del **Secretario y Subsecretario de la Secretaría de Desarrollo Social y del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia**, interpusieron recurso de **revisión adhesiva**, respectivamente, los cuales fueron admitidos por el Presidente del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, mediante acuerdos de doce de agosto y diecinueve de septiembre, ambos del año en cita.

Posteriormente, el asunto fue **remitido** al Sexto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, el que en sesión celebrada el doce de febrero de dos mil quince, determinó que lo procedente era solicitar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación **que ejerza su facultad de atracción** para conocer el recurso de revisión, por estimar que su resolución entraña fijar un criterio de importancia y trascendencia para el orden jurídico nacional.

**TERCERO. Trámite de la solicitud de ejercicio de la facultad de atracción.** Por acuerdo de dieciocho de junio de dos mil quince, el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió a trámite la solicitud de ejercicio de la facultad de atracción que se registró con el número **247/2015**; asimismo, ordenó se turnara el asunto al señor Ministro **Alberto Pérez Dayán** y se radicara en la Sala de su adscripción.

En proveído de treinta de junio de dos mil quince, el Presidente de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinó que ésta se avoca al conocimiento del asunto.

**CONSIDERANDO:**

**PRIMERO. Competencia.** Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente solicitud de ejercicio de la facultad de atracción, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción VIII, último párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 182 de la anterior Ley de Amparo y 21, fracción III, inciso b), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con relación a lo previsto en el punto Tercero del Acuerdo General Plenario 5/2013, en virtud de que se estima innecesaria la intervención del Tribunal Pleno para su resolución.

**SEGUNDO. Consideraciones previas.** De acuerdo con lo previsto en el artículo 107, fracción VIII, último párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ejerza su facultad de atracción para conocer de un asunto de la competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito, es necesario que se satisfagan los siguientes requisitos:

✦ **Formales:**

Debe ejercerse de oficio o a petición fundada del correspondiente Tribunal Colegiado de Circuito o del Procurador General de la República.

✦ **Materiales:**

A juicio de este Alto Tribunal, el asunto debe revestir características de importancia y trascendencia. Esto, es la naturaleza intrínseca del caso debe revestir un interés superlativo reflejado en la relevancia del tema [importancia] así como un carácter excepcional o novedoso que entrañe la fijación de un criterio normativo para casos futuros [trascendencia].

Lo excepcional deriva asimismo de la complejidad sistémica que presentan algunos asuntos por su interdependencia jurídica o procesal; esto es, aquellos que están relacionados entre sí de tal forma que se torna necesaria una solución que atienda a las consecuencias jurídicas de todos y cada uno de ellos.

Cabe señalar que los aludidos presupuestos materiales se desprenden de los diversos criterios que la Suprema Corte de Justicia ha emitido en relación con lo que debe entenderse por *interés* o *trascendencia*, de los que se distinguen dos tipos de requisitos:

✦ Los de carácter **cualitativo**, entre los que se encuentran conceptos tales como: “gravedad”, “trascendencia”, “complejidad”, “importancia” o “impacto”. Dentro de estos conceptos se comprenden otros derivados, a saber: “interés de la Federación”, “importancia derivada de la existencia de un conflicto de poderes”, “trascendencia jurídica”, “trascendencia histórica”, “interés de todos los sectores de la sociedad”, “interés derivado de la afectación política que generará el asunto”, “interés económico”, “interés asociado a la convivencia, bienestar y estabilidad de la sociedad”.

✦ Los de carácter **cuantitativo**, entre los que se advierten conceptos como: “carácter excepcional”, “que el asunto no tenga precedentes”, “que sea novedoso”, “que el asunto se sale del orden o regla común”, “que el asunto no tenga similitud con la totalidad o la mayoría de los asuntos” o “que se expresen razones que no cabría formular en la mayoría o en la totalidad de los asuntos”.

✦ Unos y otros pueden tener un carácter eminentemente jurídico-complejidad, excepcionalidad, novedad-, o bien, un carácter extrajurídico-trascendencia histórica, política, interés nacional-.

Por tanto, con el fin de delimitar y ordenar estos criterios, se estima pertinente utilizar los conceptos “interés” e “importancia” como notas relativas a la naturaleza intrínseca del caso, tanto jurídica como extrajurídica y el concepto de “trascendencia” para reflejar el carácter excepcional o

novedoso que entrañará la fijación de un criterio normativo para casos futuros.

**TERCERO. Antecedentes del asunto.** Para estar en aptitud de establecer si se reúnen los requisitos precisado en el considerando que antecede, particularmente los de carácter material –importancia y trascendencia–, **es menester analizar el asunto cuya atracción se solicita en su integridad** considerando para ello los antecedentes del acto reclamado, las consideraciones de la resolución recurrida y los agravios propuestos en la revisión, sin que ello implique prejuzgar sobre el fondo del asunto. Así, se desprende de la tesis P.CLI/96 del Tribunal Pleno que se lee bajo el rubro: "**ATRACCIÓN, FACULTAD DE. EL ANÁLISIS DE LA PROCEDENCIA DE SU EJERCICIO OBLIGA A EXAMINAR EL ASUNTO EN SU INTEGRIDAD, SIN PREJUZGAR SOBRE EL FONDO**".<sup>1</sup>

**I. Demanda de garantías.** Del escrito inicial de demanda y de su aclaración se desprenden los siguientes datos que interesan para la solución del presente asunto:

El ahora recurrente señaló como **actos reclamados**, la omisión del Estado mexicano de garantizarle sus derechos humanos: **(I)** a la protección más alta posible a la salud; **(II)** al reconocimiento de su personalidad jurídica, **(III)** a la seguridad social; **(IV)** a una vivienda adecuada; **(V)** a la educación; **(VI)** a la alimentación nutritiva y suficiente y de calidad; y **(VII)** al trabajo. Lo cual, se traduce, en su conjunto, en la omisión de reconocérsele su dignidad humana.

Al efecto, en los **antecedentes de los actos reclamados**, señaló que desde hace más de veinte años se encuentra en una grave situación de riesgo, *al vivir en la calle* y no tener recurso social, económico o político alguno que le permita acceder a los derechos

---

<sup>1</sup> Consultable en la página 6 del Tomo IV, Diciembre de 1996, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Novena Época

humanos mínimos que consagra la Constitución y los Tratados Internacionales.

En consecuencia, manifiesta que día a día se agrava su salud física y mental y que se encuentra en riesgo su integridad física, ya que no cuenta con una vivienda digna, ni con el acceso a servicios médicos públicos o de agua para su higiene personal, ni mucho menos tiene la oportunidad de acceder a un empleo o a una educación que le permita mejorar sus condiciones de vida, por lo que afirma que no se salvaguarda su derecho a la vida y a vivir con dignidad.

Con base a lo anterior, el quejoso aduce, en sus **conceptos de violación**, que los actos reclamados transgreden en su perjuicio los derechos fundamentales que consagran los artículos 1, 3, 4, 5, 25, 30, 34, 123, 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, 3, 6, 7, 16, 17, 22, 23, 24, 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 1, 3 y 18 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 6, 10 y 13 del Protocolo de San Salvador, 6, 7, 11 y 12 del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

**II. Sentencia de amparo.** El Juez de Distrito sobreseyó en el juicio respecto de diversos actos reclamados, por no haberse acreditado su existencia y determinó que **eran infundados los conceptos de violación planteados**, toda vez que si el quejoso pretende evidenciar que el Estado mexicano tiene la obligación de cumplir con una determinado derecho humano, debe acreditar *que instó o hizo lo pertinente a afecto de exigir el respeto a tal derecho público subjetivo*.

En ese contexto, el Juez Federal consideró que al no haberse exhibido en el juicio las documentales o constancias que acrediten que el quejoso instó al Estado a fin de hacer efectivos los derechos que estima violados, **"se carece de material para poder verificar si en la especie**



no existe alguna causa, motivo o circunstancia que impida jurídica o materialmente para resolver lo pertinente en torno a la omisión reclamada por el quejoso. Máxime, que recaía en la parte quejosa la carga probatoria de los hechos que determinan su constitucionalidad".

Por ello, al no evidenciarse que los actos reclamados vulneren en perjuicio del quejoso los derechos humanos de acceso a la educación, trabajo, vivienda, alimentación, salud, personalidad jurídica y seguridad social, el juzgador negó el amparo solicitado.

**III. Recurso de revisión.** En su escrito de expresión de agravios, **el quejoso** aduce que la sentencia de amparo resulta ilegal, puesto que es incongruente que el Juez de Distrito considere, por una parte, que la omisión de las autoridades es lesiva de derechos humanos y, por otra, pretenda sujetar la obligación de garantizar tales derechos a un acto positivo del quejoso, cuando **"la obligación positiva y el deber activo para garantizar en todo momento los derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, es del Estado mismo"**.

Por otra parte, considera que es indebido que el Juez Federal haya negado el amparo solicitado, en tanto no se apegó al nuevo marco constitucional que rige en materia de derechos y el juicio de amparo, así como los criterios interpretativos que de tales modificaciones derivaron, pues no resulta necesario que en la especie el quejoso acreditara la existencia de su solicitud para que las autoridades ejercieran las facultades que les corresponden para garantizar los derechos humanos que le reconoce el bloque de constitucionalidad, aunado a que resulta incorrecto que se le impusiera dicha carga probatoria, en virtud de que, para poder elevar esa solicitud, *resultaba necesario contar con un acta de nacimiento y tener reconocida la personalidad jurídica, cuestiones que, precisamente, carece el quejoso y que inclusive son señalados como actos reclamados.*

Asimismo, estima que los actos reclamados resultan violatorios de derechos humanos en sí y por sí mismos, *al tratarse de obligaciones mínimas que deben realizar las autoridades conforme al marco constitucional y legal*, y por tanto, no es necesario que el quejoso demuestre que ha elevado solicitudes a la autoridad para que garantice tales derechos, pues con independencia a ello, los entes estatales se encuentran conminados a cumplir oficiosamente con los mandatos constitucionales.

Finalmente, estima que la resolución recurrida es contraria a los derechos humanos de acceso a la justicia y el recurso efectivo, al basarse en formalismos y requisitos procesales que resultan contrarios al contenido de los artículos 1, 17 y 133 de la Constitución Federal, así como el 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

**IV. Solicitud de facultad de atracción.** A consideración del Sexto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, el análisis de los argumentos antes precisados permite colegir que el caso cumple con los requisitos de importancia y trascendencia, en virtud de que **"reviste un interés superlativo [...] ya que involucra los derechos más esenciales que todo ser humano tiene como lo es la salud, personalidad, seguridad social, educación, alimentación, trabajo y el reconocimiento a la dignidad humana"**.

Aunado a que la relevancia jurídica que puede derivar en el caso, se hace consistir en que entraña la fijación de un criterio jurídico novedoso cuya trascendencia también resulta de la complejidad sistémica que presente el caso respecto de los derechos humanos referidos, en los asuntos que guarden similares circunstancias.

**CUARTO. Análisis de los requisitos que condicionan la procedencia del ejercicio de la facultad de atracción.** En virtud de que el ejercicio de la facultad de atracción se solicitó por Sexto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región

y el asunto cuya atracción se solicita es el amparo en revisión \*\*\*\*\*del índice del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, es dable sostener que **los requisitos formales se encuentran satisfechos.**

Asimismo, de los antecedentes que informan el presente asunto, se desprende que **se satisfacen los requisitos materiales** para que este Alto Tribunal ejerza su facultad de atracción para conocer del citado recurso de revisión, ya que su análisis preliminar permite establecer que algunos de los temas que subsisten en el recurso **revisten un interés relevante**, en tanto es menester analizar:

1. Si atendiendo a la naturaleza de los *actos omisivos* que se reclaman a las autoridades señaladas como responsables –la violación a los derechos humanos de protección más alta posible a la salud; personalidad jurídica, acceso a la seguridad social; acceso a una vivienda adecuada; acceso a la educación; a la alimentación nutritiva y suficiente y de calidad, y al trabajo– resulta necesario que el promovente de amparo acredite que ha solicitado ante las instituciones respectivas el cumplimiento de sus obligaciones constitucionales y convencionales, teniendo en cuenta el especial estado de vulnerabilidad en que dice encontrarse.

2. En su caso, el alcance de las obligaciones que tiene el Estado mexicano a virtud de los derechos económicos y sociales que se encuentran reconocidos tanto en la Constitución Federal, como en los Tratados Internacionales de los que es parte, en específico, respecto de los sectores o grupos de la población que se encuentran en un especial estado de vulnerabilidad o precariedad a causa de su pobreza extrema.

3. En consecuencia, si resulta factible vincular a las autoridades responsables a proporcionar al quejoso las exigencias básicas que solicita para salir del estado de riesgo en que dice que se encuentra por su condición de indigencia, y en su caso, en qué medida deben proporcionarse.

Luego, resulta inconcuso que la resolución del recurso de revisión cuya atracción se solicita, entraña fijar un criterio normativo novedoso en relación con los requisitos procedimentales necesarios para exigir al Estado mexicano el cumplimiento de diversos derechos económicos y sociales, y en su caso, el alcance de las obligaciones estatales relacionadas con los referidos derechos fundamentales, respecto de los sectores vulnerables de la población mexicana, como lo son los indigentes.

**QUINTO. Decisión.** De acuerdo con la consideración que antecede, esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ejerce su facultad de atracción para conocer del recurso del amparo en revisión **\*\*\*\*\***, del índice del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito.

Por lo expuesto y fundado, se resuelve:

**PRIMERO.** Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ejerce la facultad de atracción a que este expediente se refiere.

**SEGUNDO.** Remítanse los autos a la Subsecretaría General de Acuerdos de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales consiguientes.

**Notifíquese;** y, en su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido.

Así lo resolvió la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por unanimidad de cinco votos de los señores Ministros Eduardo Medina Mora I., Juan N. Silva Meza, José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Presidente Alberto Pérez Dayán (ponente).

Firma el Ministro Presidente y en su calidad de Ponente, con el Secretario de Acuerdos de la Segunda Sala que autoriza y da fe.

**PRESIDENTE DE LA SEGUNDA SALA Y PONENTE**

**MINISTRO ALBERTO PÉREZ DAYÁN**

**SECRETARIO DE ACUERDOS DE LA SEGUNDA SALA**

**LICENCIADO MARIO EDUARDO PLATA ÁLVAREZ**

En términos de lo dispuesto por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en su sesión del veinticuatro de abril de dos mil siete, y conforme a lo previsto en los artículos 3, fracción II, 13, 14 y 18 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en el segundo párrafo del artículo 9º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos.